



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ejecutivo Laboral
Radicación: 05001-31-05-002-2020-00200-01
Ejecutante: Universidad del Valle
Demandado: Municipio de Medellín, hoy Distrito de Ciencia
Tecnología e Innovación.
Asunto: Apelación auto que resuelve excepciones
Procedencia: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Excepción prescripción e inexistencia de la obligación

Medellín, abril veintiséis (26) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, como magistrada sustanciadora, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 7 de marzo de 2023, por medio de la cual se declararon parcialmente probadas las excepciones de prescripción y pago, y, no probadas las de inexistencia de la obligación y compensación, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la UNIVERSIDAD DEL VALLE en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Radicado 05001310500220200020001

1.- ANTECEDENTES

La UNIVERSIDAD DEL VALLE, por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial, promovió demanda ejecutiva laboral en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, pretendiendo se libre mandamiento ejecutivo por la suma de \$51.757.412 por concepto de cuotas partes pensionales de la pensión de jubilación de los señores Marietta Celis de Macia, Mario Eugenio Marcial Gómez y Libardo Mejía Carriazo, por las cuotas partes comprendidas entre el 01 de julio de 2015 hasta el 28 de febrero de 2019; así como por las cuotas partes que en lo sucesivo se causen a partir del 01 de marzo de 2019 y hasta que se efectúe el pago total de la obligación; respecto de la pensión de jubilaciones de los señores ya referenciados; se libre mandamiento de pago por la suma de \$4.912.109 por intereses liquidados sobre el capital determinado \$51.757.412, por el periodo del 01 de julio de 2015 al 30 de enero de 2019 a la tasa del DTF de conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y los intereses que se sigan causando a partir del 01 de febrero de 2019.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 13 de junio del 2022, libró mandamiento de pago a favor de la Universidad del Valle y contra el Municipio de Medellín, por la suma de \$56.669.521, por concepto de cuota parte de la pensión de jubilación de los señores Marietta Celis de Macía, Libardo Mejía Carriazo y Mario Eugenio Marcial Gómez Vignes.

El Municipio de Medellín, dio respuesta a la demanda ejecutiva, formulando las excepciones de prescripción extintiva o liberatoria; pago efectivo de la obligación; compensación e inexistencia de la obligación.

1.1.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES

En audiencia pública celebrada el 7 de marzo de 2023, el Juzgado de conocimiento, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto del recobro de las cuotas partes pensionales y los intereses que se hayan generado hasta el 21 de abril de 2016; declaró probada parcialmente la excepción de pago frente a las cuotas partes pensionales entre el 1° de enero y 31 de marzo de 2016; declaró no probadas las excepciones de compensación y de inexistencia de la obligación; dispuso seguir adelante la ejecución por las obligaciones insolutas respecto de la cuota parte e intereses desde el 22 de abril de 2016 y hasta que se realice el pago y condenó en costas al Municipio de Medellín.

1.2.- RECURSO

Universidad del Valle

El apoderado de la institución ejecutante interpuso el recurso de apelación, respecto de lo resuelto al decidir la excepción de prescripción, señalando que el artículo 1625 del Código Civil enuncia los modos de extinción de las obligaciones, en el cual se establece la prescripción como uno de ellos, y remite a la regulación que de ellas se hace en las disposiciones pertinentes del libro 4 del Código Civil, lo cual explica que en relación a la prescripción extintiva del artículo 2539 de dicho código regula lo atinente a su interrupción tanto natural como civil, considerando que reconocer la prescripción sería aceptar el desconocimiento sin justificación alguna de la conducta positiva del deudor con respecto al reconocimiento de la existencia de la obligación y de quien es el titular de la acreencia respectiva, lo que resulta contrario a la buena fe y lealtad que deben prescindir las relaciones jurídicas.

Indicó que al considerarse por la Corte Constitucional en la sentencia C895 de 2009 que las cuotas partes pensionales son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, negar su reconocimiento a favor de la demandante, estaría poniendo en riesgo dicho soporte financiero, por lo cual debe contar las entidades en concurrencia para dar cabal cumplimiento al pago de cada una de las mesadas pensionales, en consideración a que las cuotas pensionales son obligaciones de contenido crediticio.

De otra parte, refirió que mediante la Ley 564 de 2012 fue expedido el Código General del Proceso y en este en su artículo 94 se regula la interrupción de la prescripción, la inoperancia de la caducidad y la constitución en mora, en este caso puntual el acreedor puede requerir al deudor por una sola vez y por escrito, requerimiento que tiene como efecto la interrupción del término de prescripción, sin necesidad de la intervención judicial alguna, requerimiento que se vio reflejado en la notificación del proyecto de la resolución en el cual se encontraba en detalle la obligación clara expresa y exigible a cargo de la entidad demandada y que además fue aceptado de manera expresa respecto de los pensionados Marietta Celis García, Mario Eugenio Macías y Libardo Mejía Carriazo, razón por la cual la excepción no estaría llamada a prosperar, por lo que solicita se revoque la decisión adoptada en los numerales 1 y 2 del fallo.

Municipio de Medellín

El apoderado de la entidad territorial, manifestó reparo frente a la fecha a partir de la cual el despacho computa el término de interrupción de la prescripción, señalando que si bien no dio por aplicable el artículo 818 del estatuto tributario y se fundó en el concepto 1895 de 2008 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, considera que el mismo no es más que un concepto que no es de carácter obligatorio y el artículo 2539 del

Código Civil regula la interrupción de la prescripción, en este caso, el artículo 94 del Código General del Proceso en efecto establece del momento a partir del cual se entiende interrumpida la prescripción, que lo sería a partir del 12 o 13 de julio de 2020 que se radicó la demanda, por ende aplicando la Ley 1066 de 2006 que indica que la naturaleza de este tipo de obligaciones prescribe a los 3 años a partir de la fecha de pago y suponiendo que la Universidad del Valle en efecto canceló las cuotas, la prescripción se configuraría a partir del 12 o 13 de julio de 2017 y no a partir del mes de abril de 2016 como lo indicó el Despacho.

Frente a la excepción de inexistencia de la obligación indicó que los hechos o motivos que se invocaron para sustentar la misma no están dirigidas a controvertir el título, el título ejecutivo lo constituye la resolución que reconoce la pensión a los pensionados, lo que se controvierte son los efectos o la manera en que se genera verdaderamente la obligación, con base en la Ley 33 de 1965 artículo 2, indica que era obligación de la Universidad del Valle notificar al distrito para efectos de estar enterado del reconocimiento de la pensión del señor Libardo Mejía Carriaso y en su momento determinar si era procedente o no formular objeciones frente a las mismas, acá no se acreditó que se hubiera presentado esa notificación, insistiendo que el demandante no acreditó haber pagado las obligaciones periódicas objeto de cobro en esta causa para que le naciera el derecho de recobro frente al Municipio de Medellín.

1.3.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos se pronunciaron los apoderados de las partes, reiterando los argumentos esbozados en la sustentación del recurso de alzada.

2.- CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.1.- PROBLEMAS JURÍDICOS:

Los problemas jurídicos a dirimir, radican en determinar

¿Si es procedente revocar o modificar el auto por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, para en su lugar declarar no probada la misma o determinar una fecha diferente a la establecida por el a quo?

¿Si debe declararse probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por el Municipio de Medellín?

2.2.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual, i) en el sublite operó el fenómeno prescriptivo de manera parcial respecto de las cuotas partes pensionales causadas con anterioridad al 22 de abril del 2016; ii) Es procedente resolver de fondo la excepción de inexistencia de la obligación, la cual debe declararse no probada, razón por la cual debe CONFIRMARSE el auto apelado, atendiendo a las siguientes razones:

2.3.- PREMISAS NORMATIVAS

Naturaleza del proceso ejecutivo laboral

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor, busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.

En esta misma perspectiva el artículo 422 del código General del Proceso, establece:

“La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios”.

La excepción de prescripción

En lo referente a la prescripción en materia laboral y sobre la interrupción de la misma, el artículo 489 del código Sustantivo de Trabajo y 151 del estatuto procesal del trabajo y la seguridad social, consagran:

“Artículo 489 C.S.T El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.

Artículo 151 C.P.L “Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

Ahora, en el asunto sometido a consideración teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación que se persigue, debe tenerse presente que la Ley 1066 de

2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, en el artículo 4, dispone:

“Cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales y prescripción de la acción de cobro. Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.

Respecto de la norma en cita, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C 895 de 2009, declarando exequibles las expresiones “y *prescripción de la acción de cobro*” y “*el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva*”, del artículo 4° de la Ley 1066 de 2006, oportunidad en la cual indicó:

*“En esa medida, la obligación de concurrencia de las diferentes entidades para contribuir al pago pensional a través del sistema de cuota parte no puede extinguirse mediante la prescripción, porque tiene un vínculo directo con el derecho, también imprescriptible, al reconocimiento de la pensión. Sin embargo, los créditos que se derivan del pago concurrente de cada mesada pensional individualmente considerada sí pueden extinguirse por esta vía (derecho al recobro), en tanto corresponden a obligaciones económicas de tracto sucesivo o naturaleza periódica entre las diferentes entidades responsables de contribuir al pago pensional. No en vano el artículo 126 de la Ley 100 de 1993 señaló expresamente que los créditos causados o exigibles por concepto de cuotas partes pensionales “*pertenecen a la primera clase del artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales*”.*

En igual sentido, tal y como lo refirió el a quo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 1895 de 2008, sostuvo que las obligaciones del pago de las cuotas pensionales prescriben en el término de 3

años, a partir de la vigencia de la Ley 1066 de 2006, asimismo, que la prescripción de estas obligaciones se interrumpe con la presentación de las cuentas de cobro y en armonía con lo anterior, el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A, en providencia del 19 de febrero de 2015, proferida dentro del proceso con radicado 25000-23-25-000-2011-00825-01, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, sostuvo:

“Teniendo en consideración lo anterior, le asiste razón a la parte demandante, cuando afirma que la acción de cobro de algunas de las cuotas partes pensionales pagadas por Caprecom y que fueron liquidadas mediante los actos acusados para su correspondiente cobro al departamento de Cundinamarca, en la porción que a éste le corresponde, se encuentran prescritas, pues no fueron liquidadas y cobradas oportunamente por la entidad pagadora, es decir, dentro de los 3 años siguientes a su causación”

Así las cosas, es claro que no puede acogerse el reparo presentado por el apoderado de la Universidad del Valle, al sostener que no puede declararse la prescripción, pues ello sería aceptar el desconocimiento sin justificación alguna de la conducta omisiva del deudor, resaltando que si bien el Municipio de Medellín, asume una conducta reprochable por el no pago oportuno de sus obligaciones, máxime cuando había manifestado aceptación en la concurrencia de pago de la cuota parte, lo cierto del caso, es que la ejecutada contaba con los mecanismos para lograr el cumplimiento de esas obligaciones y no los ejercitó oportunamente, por lo que también se evidencia un actuar pasivo de la Universidad del Valle.

Adicionalmente, el vocero judicial de la activa en respaldo de sus afirmaciones trae a colación lo señalado por la Corte Constitucional en la ya citada sentencia C-895 de 2009, en relación a la importancia del pago de las cuotas partes pensionales, como soporte financiero de la seguridad social, sin embargo, desconoce que en dicha oportunidad fue clara la Alta Corporación en indicar que, en estos asuntos *“la Corte encuentra que este tipo de normas armoniza a cabalidad*

con las políticas de saneamiento fiscal en procura de un adecuado financiamiento del sistema y de una gestión eficiente por parte de las entidades involucradas en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales. Lo que sí resultaría contrario al principio de sostenibilidad sería mantener indefinidamente obligaciones crediticias de tracto sucesivo entre las entidades responsables de contribuir al pago pensional, estimulando la desidia contable y financiera en materia de seguridad social, generando intereses exponenciales que afectarían la existencia misma de las entidades.”

En igual sentido, tampoco encuentra en esta instancia vocación de prosperidad el argumento expresado por el apoderado de la pasiva, según el cual la interrupción de la prescripción, se presenta con la radicación de la demanda, por lo que se configuraría a partir del 12 o 13 de julio de 2017 y no a partir del mes de abril de 2016 como lo indicó el Despacho, pues como se indicó anteriormente, conforme lo jurisprudencia referenciada del Consejo de Estado, la prescripción se interrumpe con la presentación de las cuentas de cobro, situación que en el caso de marras tuvo lugar el 22 de abril de 2019, tal y como se evidencia en los documentos visibles a folios 39 a 45 del anexo 001 del expediente digital, momento a partir del cual debe computarse el término de 3 años.

Colofón de lo expuesto, se estima procedente confirmar en este punto la decisión de primera instancia.

Ahora, atendiendo al disenso presentado por el apoderado del Municipio de Medellín en relación a la excepción de inexistencia de la obligación, se advierte, que el funcionario de primera instancia sostuvo que según la forma como se planteó tanto en la contestación, como en los alegatos, en especial respecto del señor Libardo Mejía Carriazo, ello se debió alegar como recurso de reposición frente a los requisitos formales del título, lo cual no se hizo en la oportunidad procesal correspondiente, no siendo esta la etapa procesal para examinar los mismos, manifestación que no se comparte por esta Sala de Decisión Laboral,

atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3° del transcrito artículo 442 del Código General del proceso, contra el mandamiento de pago, deberán alegarse mediante el recurso de reposición los hechos que configuren excepciones previas, siendo claro que la inexistencia de la obligación, no se encuentra enlistada en el artículo 100 del Código General del Proceso como excepción previa, razón por la cual, lo procedente era resolver de fondo la misma.

Pese a lo anterior, a juicio de la Sala, no está llamada a prosperar la excepción teniendo en cuenta que el título ejecutivo tratándose del recobro de cuotas partes pensionales lo conforma el acto administrativo que reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquida las cuotas partes pensionales, documentos que en efecto se encuentran glosados en el plenario.

Sumado a lo anterior, sostiene el apoderado recurrente que la Universidad del Valle no efectuó el procedimiento o trámite previo de notificación del proyecto de acto administrativo, mediante el cual se impone la obligación al Municipio de Medellín conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, evidenciando que la norma referenciada consagra:

“La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos”.

Sobre el particular, se advierte que obra en el cartulario copia del oficio 2094 – E.I.P. –LEWC, del 29 de julio de 2010, folio 89 anexo 001 del expediente digital, mediante el cual el Municipio de Medellín acepta concurrir con la cuota parte pensional en favor de la señora Marietta Celis de Macia, y en igual sentido reposa a folios 163, copia de la Resolución N° 508 de 1999, por medio

de la cual, el Municipio de Medellín asume la cuota parte pensional consultada por la Universidad del Valle, relacionada con el señor Mario Eugenio Marcial Gómez, anotando que si bien no obra escrito de aceptación en relación al pensionado Libardo Mejía Carriazo, respecto de quien hace especial referencia la ejecutada, no se acreditó por parte del Municipio de Medellín, que se hubiera formulado objeción alguna una vez le fue presentado el proyecto de liquidación y en tal sentido, conforme la norma precitada, debe entenderse aceptada.

También, advierte esta judicatura que resulta contradictorio que el Municipio de Medellín, a la par que interpone la excepción de inexistencia de la obligación, proponga la de pago efectivo de la obligación y como fundamento de la misma indique *“las cuotas partes causadas entre los meses de enero a marzo del año 2016, respecto de cada uno de los pensionados, ya fueron canceladas a través del comprobante de pago N° 902392552 del 4 de agosto de 2016, por valor de \$2.587.038”*. (subraya de la Sala), anexándose el comprobante de dicho pago, de ahí que no puede el ejecutado tratar de desconocer la existencia de una obligación, respecto de la cual, afirma, se han efectuado pagos.

Finalmente, se tiene que es reiterativo el vocero judicial del Municipio de Medellín, en sostener que el demandante no acreditó haber pagado las obligaciones periódicas objeto de cobro en esta causa para que le naciera el derecho de recobro frente al Municipio de Medellín, situación frente a la cual indica este juez plural, que en la cuenta de cobro formulada por la Universidad del Valle el 22 de abril de 2019, se relaciona como documentos adjuntos *“certificación de pago oportuno de mesadas pensionales”*, sin que el ente territorial accionado hubiera realizado requerimiento alguno a la ejecutante para que allegara tal documentación o hubiere efectuado reparo alguno a dicha cuenta de cobro, razón por la cual, ante el silencio del ejecutado, entiende esta Sala que se recibieron las certificaciones enunciadas.

Precisa sí esta Sala de Decisión, que, para efectos de la liquidación del crédito, si deberá la Universidad del Valle acreditar en el proceso que efectuó el pago de las mesadas pensionales de los señores Marietta Celis de Macía, Eugenio Marcial Gómez y Libardo Mejía Carriazo, causadas con posterioridad al 1° de marzo de 2019, teniendo en cuenta que tal y como lo ha sostenido el Consejo de Estado, para establecer si las cuotas partes pensionales son exigibles o no, es necesario verificar además de la resolución que reconoce la pensión, si se hicieron los pagos de las respectivas mesadas pensionales. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 25000-23-27-000-2008-00175-01. (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; diciembre 16 de 2011)

En consecuencia, es procedente CONFIRMAR el auto recurrido.

Sin costas en esta instancia, atendiendo a que no prosperó ninguno de los recursos.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE:

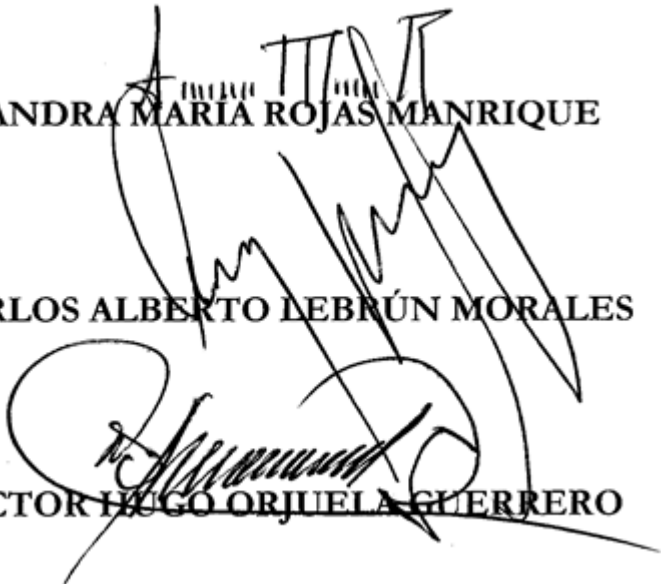
PRIMERO: Se CONFIRMA el auto proferido el 7 de marzo de 2023, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la UNIVERSIDAD DEL VALLE en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

SEGUNDO: Sin Costas en esta instancia.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No 070, fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 27 de abril de 2023.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario